SEMINARIO DE HISTORIA

Dpto. de Hª Social y del Pensamiento Político, UNED
Dpto. de Hª del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, UCM
Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón

Curso 2014-2015
Documento de trabajo 2015/6

LA PENA DE MUERTE EN LA RESTAURACIÓN: UNA HISTORIA DEL CAMBIO SOCIAL

Óscar Bascuñán Añover
(Universidad Complutense de Madrid)

SESIÓN: JUEVES, 25 DE JUNIO DE 2015, 19 H.

Lugar: Biblioteca
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
c/ Fortuny 53, 28010 Madrid

Contacto: seminariodehistoria@gmail.com

“Algunos sentían inexplicable terror; otros [...], votaron por la asistencia.
Sí, era preciso ver aquello, qué sabe Dios cuando se volvería a ver.
La ardiente curiosidad pueril pudo más que el instintivo recelo de las emociones demasiado fuertes.
No había que vacilar, y allá fue la banda saltando de gozo”.

Benito Pérez Galdós, *Ángel Guerra*, (1891).

El 13 de marzo de 1882 el Paseo del Tránsito se preparaba para acoger uno de los espectáculos públicos a los que estaba destinado desde décadas atrás. Hacía años que Toledo no presenciaba algo así, pero el paseo seguía conservando su antigua función por ser uno de los mayores espacios abiertos entre las incontables y laberínticas callejuelas del trazado urbano. La ratificación de la sentencia impuesta por el Consejo de Guerra se dio a conocer el sábado por la noche, apenas dos días antes de la inminente ejecución, lo que cogió por sorpresa a buena parte de la población y a las autoridades locales sin apenas capacidad de reacción. Ni la súplica de indulto elevada por el Ayuntamiento de la ciudad ni las gestiones del cabildo primado llevadas a cabo el mismo domingo consiguieron una respuesta favorable del gobierno. Los tres reos eran puestos en capilla de forma inmediata, preparados para su ejecución pública al día siguiente. Juan García López y los dos hermanos Casimiro y Ambrosio Navarro Clemente eran miembros de la célebre partida de bandoleros conocida como *Juanillones y Purgaciones*, que llevaba años actuando entre los Montes de Toledo y la llanura manchega. Acusados de varios robos, asaltos, asesinatos y secuestros, habían sido condenados a pena de muerte y debían ser pasados por las armas sin más dilación¹.

Los detalles de la ejecución ocuparon alguna columna en la prensa de tirada local y nacional. La crónica del suceso ofrecida días después por el corresponsal de *La Correspondencia de España* exhibía un claro formato o género periodístico. Los reos eran presentados como inquietantes “criminales”, detenidos tras una “refriega” con la Guardia Civil de la que resultaron cuatro muertos. Su procesamiento alimentaba párrafos de especulaciones dado el conflicto competencial entre la administración de justicia civil y militar, que finalmente elevó la inicial sentencia de cadena perpetua a la pena capital. El resto de la narración intensificaba los elementos dramáticos y emocionales con la posible finalidad de buscar el interés y el apasionamiento del

¹ La relación de ejecuciones públicas en el Toledo de la primera mitad del XIX, en CERRO MALAGÓN (2007). El bandolerismo en los Montes de Toledo, en URDA LOZANO (2011). La popularidad alcanzada por estos bandoleros llegó a inspirar una breve obra de consumo popular que novelaba sus andanzas, en MINUESA PICAZO (s.a.).

público lector, pero también su persuasión mediante un mensaje moral bien articulado: la angustia de uno de los reos y la serenidad de otro al pasar a capilla, la despedida y lágrimas de sus mujeres e hijas, la última misa y comunión, la noche en vela, el aliento y la “exhortación” de los sacerdotes que les acompañaron en ese momento de trance, las “pulsaciones por minuto” de cada uno de ellos llegada la hora, su desplazamiento en carro desde la cárcel, la primera descarga del piquete, los gritos de “¡Misericordia! ¡Perdón! ¡Dios Mío!” del que aún quedó “de rodillas y sin rematar”, la repetición del fuego “una y otra vez” hasta acabar con la vida de todos ellos, la recogida de los cadáveres y su conducción en andas y con la “cruz alzada” hacia el campo santo².

La reconstrucción de los hechos arrancaba con la historia de un crimen y, después de detenerse en los detalles más morbosos, concluía con la ejecución de los condenados, una muerte que de algún modo se mostraba justificada, que saldaba cuentas, restituía el agravio y aliviaba la indignación de la multitud que asistía a la ejecución. La concurrencia había sido “numerosa y muy apiñada”, según el citado artículo. Otro periódico, esta vez local, de título *El Nuevo Ateneo*, cifraba la asistencia en “12.000 almas”, más de la mitad de la población toledana del momento. Para más detalle añadía que “las dos terceras partes eran mujeres”. Un cálculo probablemente impreciso, pero que denota la sensación de afluencia masiva que percibieron todos los testigos de los hechos. El cronista de este rotativo local no encontraba argumento o explicación razonable a tan gran concentración popular en actos de esa naturaleza. Su artículo, lejos de los principales relatos sensacionalistas del momento, se convirtió en uno de los primeros alegatos de la prensa toledana a favor de la abolición de la pena de muerte. Los términos en los que se expresaba eran realmente elocuentes:

“[...] Triste, muy triste es que los hombres abandonen sus faenas para presenciar escenas de sangre, pero doblemente doloroso es la asistencia del sexo femenino a actos de esta naturaleza.

No puedo explicarme que débiles seres en que debe resplandecer el amor, el sentimiento y la caridad concurren a presenciar el suplicio de sus semejantes, en lugar de llorar en sus casas, compadeciendo a las víctimas y rogando por ellas, por sus padres, por sus esposos, por sus hijos, por sus hermanos.

[...] Qué razón tiene un amigo mío que dice que la humanidad es loca. Dispone en su justicia de la vida de los hombres y luego demanda una limosna para rogar por el alma de aquéllos a quienes ella misma mata. ¡Qué sarcasmo!

[...] La pena de muerte siempre será un crimen y como tal será siempre vista con horror por toda alma generosa y caritativa. La pena de muerte la rechaza en absoluto toda la humanidad, porque no es lícito, ni es honrado, ni es principio de jurisprudencia castigar el delito con el mismo o mayor delito.

² “Edición de la noche”, *La Correspondencia de España*, 15-3-1882.

[...] Por otra parte, ¿a qué hacer públicas las ejecuciones? ¿Qué objeto real y positivo se alcanza con ello? Seguramente que ninguno. Sólo acostumbrar al pueblo a presenciar escenas de sangre, que contempla riéndose y engulléndose un pedazo de pan”³.

El “sentimiento” hacia los semejantes, el “alma generosa y caritativa” o la “humanidad” parecían cualidades ajenas a buena parte de la población toledana, según el autor del alegato. La ceremonia podía ocasionar angustia y terror en las conciencias más sensibles del momento, pero no eran éstos los sentimientos más extendidos entre los que acudieron a la ejecución, que incluso abandonaron el trabajo y los comercios a las horas centrales del día para presenciar el espectáculo. El cronista se refería a la multitud con desdén, algo habitual entre los coetáneos abolicionistas, que a través de la literatura y escritos de diferente naturaleza dejaron testimonio del ambiente tenso y estremecedor, en un estado entre lo festivo y lo trágico, lo excitante y apasionado, a veces liberador, otras perturbador, que acompañaba y daba fuerza dramática al ritual de la ejecución pública⁴. Desde aquel inolvidable relato con el que Michel Foucault iniciaba su *Vigilar y castigar* sobre la ejecución de Robert Damiens en la plaza de Grève de París en 1757, muchos estudios han indagado en el significado político y jurídico de tales ceremoniales, así como en el papel que parecía tener reservado el público asistente en este teatro de crueldad⁵. Las explicaciones, a veces demasiado tentadas por argumentos que atribuyen a las multitudes una esencia visceral o por el análisis extemporáneo y anacrónico, podrían encontrar una mejor respuesta si prestasen mayor atención al proceso de cambio histórico de este fenómeno social⁶.

Indicios de ese cambio parecían mostrarse en la misma ciudad 32 años después de la ejecución pública de los tres bandoleros. A finales de abril de 1914 otra “multitud inmensa” volvió a salir a las calles de la pequeña capital de provincia para recorrer algunas de sus arterias principales en “sentida manifestación” hasta las puertas del Gobierno Civil. Esta vez el propósito y las formas del “inmenso gentío” eran bien distintas a las de la última ejecución pública décadas atrás⁷. El comercio había vuelto a

³ “Crónica de la semana”, *El Nuevo Ateneo*, 19-3-1882.

⁴ Posiblemente el retrato más preciso del ambiente y perfil social del público que asistía a estas ejecuciones lo encontramos en PULIDO (1897). También a través de la literatura de fin de siglo, en PARDO BAZÁN (1891), PÉREZ GALDÓS (1891); y BAROJA (1904).

⁵ FOUCAULT (1979).

⁶ El propósito de enmarcar mentalidades y actitudes sociales ante la pena de muerte en el proceso histórico, en SPIERENBURG (1984); OLIVER OLMO (2008); y GARLAND (2013).

⁷ Las expresiones entrecomilladas, en orden de aparición en el texto, en “Una manifestación grandiosa”, *El Eco Toledano*, 25-4-1914; “Odia al delito...”, *La Decisión*, 26-4-1914; y “Una manifestación”, *El Castellano*, 26-4-1914.

cerrar sus puertas, pero en esta ocasión en señal de disgusto o protesta, con ánimo de secundar la manifestación. La petición al gobierno entre los manifestantes era unánime: el indulto de Aniceto Camuñas. El reo era un antiguo conocido de la Justicia, encarcelado anteriormente por robo, que en su última visita a los tribunales había sido sentenciado a pena de muerte por el asesinato a sangre fría de su mujer, que para mayor crueldad se encontraba embarazada. Condena que había sido ratificada por el Tribunal Supremo apenas una semana antes de la manifestación a favor del indulto. La ejecución por garrote vil debía llevarse a cabo de forma inminente en la cárcel de Toledo, donde el reo se encontraba recluido a la espera de sentencia firme.

La prensa local compartía una misma opinión sobre el crimen cometido. Lo calificaba “todo lo execrable que puede concebirse” y no dejaba el menor resquicio de dudas sobre la culpabilidad de Aniceto Camuñas. La imagen que la opinión pública podía tener del reo a través de las páginas de los periódicos era la de un delincuente habitual sin escrúpulos o perturbado, sobre el que no se conocían posibles errores procesales, torturas o significación política alguna durante la causa judicial. Ni en el proceso, ni en boca de la defensa, ni siquiera en la prensa, se lanzó una mínima sombra de sospecha que apuntase en esta dirección para avivar el apoyo de los sectores políticos y sociales más críticos con las instituciones políticas y judiciales del momento. Tampoco era posible excitar cierto sentimiento de solidaridad comunitaria entre los habitantes de Toledo por la inevitable desgracia o el exceso de celo al que se podía enfrentar uno de sus vecinos, con el que compartirían experiencias, vínculos, relaciones familiares, afectivas o sociales. El reo era vecino de Madridejos, población manchega situada a una distancia superior a los 70 kilómetros de la capital provincial, lo que eleva las posibilidades de que rara vez hubiese estado en ella hasta el momento de ingresar en la cárcel⁸.

Sin embargo, la respuesta de la población ante este suceso resultó ser muy diferente a lo que en un principio se podría esperar en función de los antecedentes que rodeaban a la última ejecución habida en la ciudad. Conocida y difundida la noticia en la prensa local, se desató una importante campaña de opinión pública y movilización social en Toledo que clamaba por el indulto del preso, al margen de su incuestionable culpabilidad de los hechos. Durante dos semanas se sucedieron informaciones continuas y seguimiento detallado del caso, artículos contra la pena de muerte, que descargaban la

⁸ “Sentencia de muerte confirmada”, *El Eco Toledano*, 21-4-1914.

responsabilidad del reo en virtud de informes médicos, que apelaban a la bondad del rey, a la del Gobierno, y a las emociones o sentimientos compasivos de la población; se lanzaron a la búsqueda de apoyos públicos entre los representantes de las principales instituciones y asociaciones de la ciudad y la provincia, se publicaron llamamientos al envío masivo de cartas y telegramas al Consejo de Ministros, se formaron y enviaron comisiones a Madrid y se recogieron firmas en los lugares centrales de la sociabilidad toledana. La campaña alcanzó su momento culminante con la mencionada manifestación, acompañada del cierre de los comercios. Autoridades locales y provinciales, directores de los principales periódicos, miembros de las diferentes corporaciones y asociaciones de la ciudad, comerciantes, industriales y obreros de la Casa del Pueblo, secundaron la campaña en lo que parecía un gesto insólito en una ciudad que estaba experimentando un interesante proceso de socialización política y conflicto social. Cuatro días después de la manifestación recibían con entusiasmo y alivio el decreto de indulto firmado por el rey⁹.

Entre los dos episodios narrados, el fusilamiento de los bandoleros y el indulto de Aniceto Camuñas, resulta más que evidente la existencia de un fuerte contraste. En poco más de tres décadas, un espacio de tiempo considerable, pero no excesivo, parecían haber operado una serie de cambios que acabaron afectando a las actitudes y prácticas frente a la pena de muerte. A intentar explicar esos cambios o, al menos, algunos de ellos, es decir, el por qué y el cómo del cambio o, dicho de otro modo, las causas y la lógica de estos procesos de cambio, dedicaremos las siguientes páginas. Para ello, es conveniente partir de una serie de interrogantes que ayuden a orientar el propósito de este texto, descubrir esos cambios y facilitar la obtención de alguna respuesta o resultado. En primer lugar, es necesario preguntarse por las diferentes formas de actuar del poder político, de la orden de ejecución pública en el primer episodio a la concesión del indulto en el segundo: ¿por qué la decisión del gobierno fue tan diferente en cada caso? Ya sabemos que no fue el mismo gobierno ni los mismos individuos los que adoptaron decisiones tan dispares, pero ¿eran decisiones puntuales, ceñidas a argumentos meramente jurídicos, o podemos enmarcarlas en procesos políticos propios de dinámicas y transformaciones estatales que guardan relación con las formas de entender el poder e impartir el castigo?

⁹ *Gaceta de Madrid*, 30-4-1914, p. 214.

En segundo lugar, es necesario dirigir la atención a las nuevas actitudes sociales manifestadas en 1914 por la población toledana contra la aplicación de la pena capital: ¿por qué un recluso condenado por un crimen tan atroz consiguió despertar tales gestos de humanidad, compasión, solidaridad y hasta movilización? ¿Estamos ante una respuesta aislada, viciada por intereses personales y locales, o ante procesos de cambio en las sensibilidades que descargaron de significado político y cultural las ejecuciones? En este caso, ¿cómo se pasó de la curiosidad o el entusiasmo mayoritario al rechazo social de las formas más severas de castigo del Estado? Por último, la relación directa entre la campaña de movilización de 1914 y la concesión del indulto, obliga a preguntarse por la capacidad de determinadas fuerzas políticas y movimientos sociales para articular corrientes de opinión y canalizar demandas colectivas: ¿por qué las voces abolicionistas de Toledo en 1882 no pudieron promover campañas de movilización contra la pena de muerte como sí lo hicieron en 1914? ¿Las formas de esta movilización y la respuesta de las autoridades denotan un aumento de la competencia política en el escenario local? En definitiva, el propósito de las siguientes páginas no es otro que el de entender algo mejor las transformaciones que estaban operando en la sociedad de entre siglos y ahondar en el debate sobre la participación de diferentes grupos y movimientos sociales en la demanda de derechos que hoy consideramos fundamentales de la ciudadanía.

La ejemplaridad punitiva del Estado

La pena de muerte es, en esencia, un ejercicio de poder que ha sido utilizado en algún momento en la mayoría de las sociedades conocidas¹⁰. El propósito o la función social de ésta, no obstante, ha podido ser más compleja y cambiante por la capacidad de los diferentes sistemas estatales para moldear sus formas, significados y usos en cada época o lugar determinado¹¹. En aquellos períodos de formación de los primeros estados nacionales se estrecharon los vínculos entre la pena capital y los procesos de afirmación y representación del poder soberano. La pena capital fue utilizada entonces como un instrumento de dominación, que se entendía esencial para la estabilidad del poder constituido o la seguridad del Estado. El jurista ilustrado Cesare Beccaria entendió bien esta relación en su clásico tratado *De los delitos y de las penas*, al definir la pena capital como “una guerra de la nación contra un ciudadano, porque juzga útil o necesaria la

¹⁰ OTTERBEIN (1986).

¹¹ GARLAND (2013).

destrucción de su ser”¹². El empeño en hacer de este castigo una ceremonia pública cargada de símbolos y representaciones culturales, con la presencia de todo tipo de autoridades civiles, militares y religiosas, estandartes, vestimentas, música de tambores y discursos finales, obedecía al claro interés político de una autoridad por demostrar su fuerza y reivindicar el monopolio de la violencia en un territorio específico. La pedagogía del terror que comportaba toda contemplación de una ejecución debía mostrar a la población los riesgos de cometer determinados delitos, los límites del desorden, el ejemplo, la intimidación, pero sobre todo debía recordarles quién tenía reservada la potestad de restaurar el orden ultrajado¹³.

La capacidad de ejecutar a enemigos, sujetos desobedientes o individuos considerados peligrosos pudo otorgar a la pena de muerte una función política especial en períodos en que dos modelos de Estado pugnaban por establecer el poder soberano, se sentían amenazados por contendientes políticos o buscaban el poder absoluto. En este sentido, los estudios sobre violencia política han conseguido contrastar el aumento de las ejecuciones públicas en el tiempo en el que se desmoronaba el Antiguo Régimen y se implantaba el Estado liberal. El poder político en el Antiguo Régimen parece que no necesitó demostrar públicamente su fuerza en tantas ocasiones como lo hizo durante su propia crisis. Las primeras décadas del liberalismo, de igual modo, estuvieron plagadas de insurrecciones, guerras civiles, protestas sociales y transgresiones de la ley más a menudo reprimidas con la ejemplaridad de la pena de muerte que en siglos anteriores¹⁴. Tal y como ha subrayado Charles Tilly en varias de sus numerosas obras de referencia, demostrar en determinadas circunstancias de contienda política la falta de escrúpulos robustece la reputación de aquel que aspira al monopolio de la violencia, otorga credibilidad a sus amenazas, capacidad de persuasión y retraimiento en sus adversarios. La debilidad de acción en momentos en los que el poder soberano es discutido, en cambio, puede dañar su autoridad y alentar a los oponentes¹⁵.

El reformismo ilustrado consiguió emparar la codificación liberal de un nuevo proceso y derecho penal que buscaba mayor moderación y proporcionalidad en la legislación punitiva, suavizar determinadas costumbres, eliminar el tormento, las penas corporales más crueles y ofrecer una alternativa que elevaba la prisión a la principal forma de castigo. Sin embargo, la pena capital estuvo lejos de desaparecer de los

¹² BECCARIA (2015): 57.

¹³ HAY (1977); FOUCAULT (1979); GEERTZ (1983); SPIERENBURG (1984); y EVANS (1996).

¹⁴ EVANS (1996); y DUFF (2001).

¹⁵ TILLY (1992 y 2007).

códigos para los delitos considerados más graves y las ejecuciones públicas se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XIX en buena parte de Europa occidental y hasta el año 1900 en España. El Código Penal de 1848 exhibía una extremada severidad en muchas materias e imponía la pena de muerte con gran frecuencia, especialmente para causas de robo con homicidio, bandolerismo y delitos considerados políticos y militares. Los artículos 90 y 91 no ahorraban en los detalles más morbosos y macabros sobre el ceremonial público de la ejecución, que merecieron la alabanza de los juristas de su tiempo. Habría que esperar al Código Penal de 1870, en vigor hasta finales de 1932, con una breve interrupción debida al Código Penal de 1928, para que se introdujesen algunas modificaciones encaminadas a la dulcificación de las penas y la reducción de los casos de aplicación de la pena capital respecto al código anterior. No obstante, determinados delitos políticos continuarían sin librarse de este castigo y la pretendida disminución de la máxima pena trataría de ser compensada en tiempos de la Restauración por una mayor atribución de la justicia castrense en delitos considerados contra la seguridad del Estado y la severidad con la que actuaron las políticas y fuerzas del denominado orden público¹⁶.

El número y la frecuencia con la que se aplicaron estas ejecuciones podrían dar buena cuenta del peso o la evolución de la pena capital en la conformación del sistema punitivo liberal. Ahora bien, es conveniente advertir que la discontinuidad y lagunas de las estadísticas criminales, el complejo y dilatado proceso que atravesaba una sentencia de muerte, desde que se dictaba hasta su posible aplicación, y la opacidad de la jurisdicción militar expone todo intento de ofrecer datos precisos a un inevitable baile de cifras, especialmente para el siglo XIX¹⁷. Con tales precauciones se debe tratar la *Colección de Jurisprudencia Criminal*, publicación oficial que ofrece una serie estadística de las sentencias de muerte dictadas por las Audiencias y vistas en recurso de casación por el Tribunal Supremo desde 1870. Sus números sólo recogen la actividad de la jurisdicción ordinaria, no de la militar, y tampoco ofrecen una información completa sobre las sentencias de muerte que fueron finalmente ejecutadas o conmutadas a cadena perpetua a través de la gracia del indulto. Para aproximarnos a esto último, tenemos que recurrir al clásico estudio de José María Rodríguez Devesa, basado en un conjunto de fuentes bibliográficas y estadísticas. Los números del penalista no siempre coinciden

¹⁶ TOMAS Y VALIENTE (2002); BALLBÉ (1983); GONZÁLEZ CALLEJA (1998); PUYOL MONTERO (2001); y OLIVER OLMO (2008).

¹⁷ Algunos de los primeros intentos de computar el número de penas de muerte, aunque con resultados diversos, en TORRES CAMPOS (1879); PULIDO (1897); y RUIZ FUNES (1934).

con los de la *Colección de Jurisprudencia Criminal* hasta la segunda década del XX, pero la relación de indultos que maneja puede servir de gran utilidad para observar tendencias prolongadas en el tiempo, abrir vías de reflexión y análisis.

CUADRO 1. Sentencias de muerte e indultos por la jurisdicción ordinaria, 1870-1929

Años	Sentencias muerte	Indultos	%Indultos sobre sentencias
1870-79	262	129	49,2
1880-89	384	239	62,2
1890-99	558	327	58,6
1900-09	414	276	66,6
1910-19	221	174*	78,7
1920-29	122	-	-
TOTAL	1.961	1.145	

*Hasta 1917.

Fuente: Los números de las sentencias de muerte han sido tomados de la *Colección de Jurisprudencia Criminal* en SERRANO TÁRRAGA (1992). Los números de indultos en RODRÍGUEZ DEVESA (1967).

La observación detenida del cuadro 1 permite extraer una serie de conclusiones fundamentales sobre la evolución temporal de las sentencias de muerte y los indultos. En primer lugar, las sentencias dictadas por las audiencias experimentaron un importante incremento en las tres últimas décadas del siglo XIX, llegando la década de 1890 a doblar a la de 1870 en número de sentencias de muerte. El año con mayor número de penas capitales dictadas fue el de 1894, con un total de 84 sentencias; seguido de 1896, con 62; 1893, con 60; y 1898, con 58. La pretendida disminución de la pena de muerte en el Código de 1870 no parece que tuviese un efecto inmediato en los números de los tribunales ordinarios. La tendencia, de hecho, no se invierte hasta los inicios del XX, llegando a mostrar una acusada reducción en la segunda década del siglo. En segundo lugar, los indultos concedidos estuvieron expuestos a un progresivo aumento numérico en los tres últimos decenios del XIX y porcentual en los primeros del XX. La década de 1910, además de albergar el menor número de sentencias de muerte de esta serie, también alcanza el mayor porcentaje de indultos, con una estimación media de algo más de tres indultos por cada cuatro sentencias dictadas. Por último, la relación entre sentencias de muerte e indultos muestra que fueron más las sentencias

conmutadas a cadena perpetua por la vía del indulto que las ejecuciones, y muy especialmente a partir del cambio de siglo.

Las ejecuciones, de hecho, para las que no hay estadísticas oficiales ni números del todo fiables, pudieron ser menores a la cifra que se podría deducir de la diferencia entre sentencias de muerte e indultos. Los fallecidos en prisión, los suicidios, los que cayeron en enajenación mental o los fugados durante esos largos años de espera a que se resuelva el indulto o se aplique la pena, podrían explicar sólo en parte este desajuste. Los estudios de la época de la mano de Rafael Salillas y Camilo Marquina insisten en que en el último tercio del XIX, entre 1867 y 1899, fueron ejecutados por la justicia ordinaria 398 reos, esto es, una tercera parte de las sentencias de muerte dictadas por los tribunales en aquel período¹⁸. El penalista republicano Mariano Ruíz Funes reduce a 37 las ejecuciones en la primera década del XX y a 23 en las dos décadas siguientes, lo que supone una proporción inferior al 10%. Estos cálculos pueden ofrecer una imagen más nítida del impacto que aquellas ejecuciones podían tener en la sociedad o de la relación de ésta con la pena de muerte si se presentan de esta otra manera: en el último tercio del XIX se producía una media de una ejecución al mes en toda España, en la primera década del XX apenas se aplicaban cuatro ejecuciones al año y en las dos décadas siguientes poco más de una al año¹⁹.

La disminución de las ejecuciones, el paulatino incremento de los indultos y el cambio de tendencia de las sentencias de muerte dictadas por los tribunales con la entrada del novecientos no parecen coincidir precisamente con los períodos de mayor o menor criminalidad. Los movimientos de ejecuciones e indultos especialmente en determinadas fechas apuntan, en cambio, a una fuerte dependencia de algunos acontecimientos políticos. Las ejecuciones, por ejemplo, disminuyeron en 1873, durante el debate abolicionista de la I República, para aumentar en 1874 y alcanzar un mayor auge a partir de 1876. En 1878, todavía lejos de que el régimen de la Restauración alcanzase su ansiada estabilidad política e institucional, se ejecutaron a 17 reos, el 90% de las sentencias de muerte. Habría que esperar a los últimos años del denominado Parlamento Largo de Sagasta para que los indultos superasen el 60% de las penas capitales impuestas por la justicia. Llamativo también resulta que todas las penas de muerte dictadas por los tribunales ordinarios en los años 1910 y 1911 obtuviesen el indulto, cuando aún resonaban los ecos de la campaña internacional contra la ejecución

¹⁸ SALILLAS (1906); y MARQUINA Y KINDELÁN (1900).

¹⁹ RUIZ FUNES (1934).

militar de Ferrer y un nuevo gobierno de tendencia liberal-demócrata volvía a mostrar mayor sensibilidad por la abolición de la pena capital. El propio José Canalejas propuso el indulto de los seis condenados a muerte por los sucesos de Cullera, reaccionando de forma muy distinta a Antonio Maura tras la Semana Trágica. Tampoco parece casual que el trienio 1916-1918 discurriese sin ejecuciones, como si no se quisiese añadir más horror al que se estaba produciendo en los campos de Europa²⁰.

Dos interrogantes surgen inevitablemente ante este descenso de sentencias de muerte y ejecuciones tan vinculado a decisiones políticas. El primero de ellos: ¿Estaba la pena de muerte dejando de ser una pieza central del poder del Estado? En los albores del siglo XX, su paulatino abandono caminaba en proporción inversa a la racionalización de las estructuras de poder. Políticamente, el régimen de la Restauración era por lo general algo más sólido y fuerte que en sus comienzos y contaba con ciertas infraestructuras de control de la población a través de la burocracia gubernamental, la regulación jurídica, el sistema penal, el cobro de algunos impuestos y otras instituciones que, a falta de mayores dosis de consentimiento de las que entonces podía proporcionar el clientelismo o el nacionalismo, conformaban su aparato coercitivo, como el ejército permanente y las fuerzas de orden público. La ejecución no era ya la única forma que tenía el Estado de comunicarse con la población ni de hacer valer sus reivindicaciones de autoridad. La pena de muerte se convirtió en un instrumento de gobierno menos prominente, menos esencial para gobernar en el día a día, y su aplicación parecía quedar cada vez más reservada a situaciones excepcionales en las que un crimen brutal conmocionaba a la opinión pública o a episodios insurreccionales en los que intervenía la justicia militar²¹.

A medida que sus funciones de preservación del poder estatal perdieron protagonismo, también su práctica adquirió otras formas y significados. Con la aprobación por las Cortes de la denominada “Ley Pulido” en el año 1900, la pena de muerte quedó recluida al interior de las prisiones, en algún sitio adecuado del establecimiento penal, para que incluso ahí se asegurase la privacidad del acto²². Lo que

²⁰ *Ibíd.*

²¹ GARLAND (2013); y EVANS (1996). A modo de ejemplo no exhaustivo, los tribunales militares fueron los que actuaron en las ejecuciones de los cinco anarquistas por el atentado de la calle Cambios en Barcelona, en la de Angiolillo, en la de Ferrer y en la de los capitanes Galán y García Hernández en 1930.

²² Una Real Orden anterior, de 24 de noviembre de 1894, dotaba de fundamento a esta reforma legislativa, al establecer con carácter general que la máxima pena dejaba de aplicarse en sitios públicos para trasladarse al interior de las cárceles siempre que existiese en ellas un lugar apropiado para la ejecución. No obstante, éstas debieron seguir siendo públicas unos años más, ya que la última ejecución pública ha sido documentada en 1897. Véase, PUYOL MONTERO (2001): 171-172.

había sido una ceremonia de poder pensada para exhibirse en la plaza, teatralizar el suplicio del reo, someterlo a escarnio e intimidar o aterrorizar al público asistente, quedaba reducido a un instrumento de la justicia penal. El espectáculo político de la ejecución pública había dado paso a un medio de aplicar una sanción penal con mayor rapidez, eficacia y frialdad. La muerte y sólo la imposición de la muerte se convirtió en el castigo, pues todas las degradaciones y agravios adicionales debían ser evitados. El ritual de la muerte estatal había dejado de ser un evento ruidoso para convertirse en un procedimiento silencioso, había dejado de ser un acto demostrativo para justificarse como meramente defensivo. La pena de muerte quedó apartada de los ojos de las gentes, del espacio público y de la experiencia de la vida cotidiana²³.

Este proceso al que asistió la pena capital también se pudo ver reforzado por la necesidad estatal de desarrollar un sistema penal más eficaz, que definiese con precisión las penas que correspondían a cada delito y mantuviese cierta legitimidad en un nuevo contexto de cambio. El encierro legal o la nueva prisión disciplinaria, el sistema que obliga a pagar tiempo a los penados, se adecuaba mejor a las nuevas relaciones jurídicas del liberalismo. El principal castigo del Código Penal de 1848 era, a pesar de todo, la pena privativa de libertad, seguida por las penas pecuniarias; y el de 1870 estableció una gradación en las penas, lo que suponía que la pena de muerte dejaba de considerarse el único castigo de determinados delitos para pasar a ser el grado máximo de castigo que se podía imponer a esos mismos delitos. Una mayor vía se abrió así para que el arbitrio del juez pudiese decantarse por la prisión temporal o la cadena perpetua. La prisión se fue convirtiendo en el castigo para todo tipo de delitos a medida que fue desarrollándose una administración carcelaria centralizada y una red de cárceles locales y presidios estatales que aspiraban a ser más seguros, austeros y disciplinarios. El nuevo sistema penal no indica el fin de la violencia estatal, pero planteaba inevitablemente la cuestión del valor, la necesidad o la utilidad de la pena de muerte como forma ordinaria de administrar justicia²⁴.

Esta última cuestión conecta directamente con el segundo interrogante que nos sugería el pronunciado descenso de sentencias de muerte y ejecuciones: ¿Qué sentido

²³ OLIVER OLMO (2008).

²⁴ El desarrollo de la prisión como forma principal de castigo estatal ha merecido numerosas interpretaciones. Bajo la impronta del materialismo histórico fueron obras de referencia las de MELOSSI y PAVARINI (1980); y SERNA ALONSO (1988). Una lectura estrictamente económica que pronto quedó eclipsada por el impacto de la ya referida obra de Foucault y sus procesos de producción de disciplinas, en FRAILE (1987); ROLDÁN BARBERO (1988); y TRINIDAD FERNÁNDEZ (1991). Nuevas aportaciones al debate han surgido con la incorporación de elementos culturales por parte de la sociología, en MATTHEWS (2003); GARLAND (1999 y 2005); y OLIVER OLMO (2013).

tenía o a qué necesidad respondía seguir imponiendo una pena que tan pocas veces el gobierno consentía aplicar? La respuesta, una vez más, sólo se puede escribir en términos políticos y no meramente jurídicos. De hecho, el Tribunal Supremo rara vez obligaba a las audiencias en recurso de casación a revisar sus sentencias originales. El perdón estaba reservado al poder político, como última medida de gracia, otorgándole así una fuente adicional de autoridad y prestigio tan poderosa en tiempos de mayor estabilidad como lo podía ser una ejecución pública en períodos de contienda o de violencia constante. El proceso de perdón desataba una serie de peticiones de personalidades, encuentros con diputados o ministros y tráfico de influencias, que contribuía a conformar un sistema útil de control social a la sombra del patíbulo. En palabras de Douglas Hay, en estos actos de misericordia se encontraban “las estructuras mentales del paternalismo”. El poder de interceder o amparar a alguien en una cuestión de vida o muerte constituía un favor que no se olvidaría fácilmente, que podía reforzar la red de obediencia, gratitud y deferencia. El mensaje contenía una gran fuerza simbólica y no sólo debía llegar al sujeto interesado, sino a toda la sociedad. Precisamente por ello, muchos indultos se concedían de manera colectiva y se hacían coincidir con el día de Viernes Santo o con los aniversarios de la realeza²⁵.

La pena de muerte ya no era aquella herramienta indispensable para proyectar el poder estatal que fue en décadas pasadas, pero demostraba seguir manteniendo los suficientes usos políticos para que los diferentes gobiernos de la Restauración se resistiesen a eliminarla del ordenamiento jurídico. Una utilización más moderada y restringida pretendía que pareciese más legítima o justificada en caso de que las autoridades permitiesen su aplicación como último recurso. Además, dotaba a los gobiernos de un recurso político si deseaban dar señales de su determinación contra el desorden, su indulgencia con los condenados, su distancia de gobiernos salientes o de regímenes políticos anteriores. En definitiva, el carácter y uso de la pena capital estuvo moldeado por las cambiantes formas estatales e intereses gubernamentales. Esto también ayuda a entender por qué los procesos de reforma o abolición en esta materia difícilmente prosperaron en períodos de agitación política y social. Ahora bien, los propósitos utilitarios, esto es, la preservación de las instituciones, el control social de la población y del delito, no fueron los únicos que intervinieron en este proceso de transformación. Otros desarrollos sociales, procesos culturales y políticos estaban

²⁵ HAY (1977); y STRANGE (1996).

operando detrás de las decisiones y acciones del poder, redefiniendo sus intereses y formas con respecto a la pena de muerte.

Nuevas sensibilidades sobre la pena de muerte

Apenas confirmada la sentencia de muerte por la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra Aniceto Camuñas en abril de 1914, el abogado y el procurador de la defensa del recluso enviaron una carta a los directores de los periódicos toledanos. Si pretendían conseguir la mayor notoriedad o publicidad de su causa, sabían muy bien a quién dirigir una carta así. Al día siguiente, *El Eco Toledano*, diario que se debatía entre sus originarias posiciones republicanas y las demócratas del sector garciaprietista del fragmentado Partido Liberal, era el primero en publicar en primera página y a cuatro columnas una amplia información titulada “Sentencia de muerte confirmada. Recabemos el indulto”. En ésta era reproducida íntegramente la carta escrita por los letrados, en la que se solicitaba el “apoyo y cooperación” del diario “á fin de que moviendo á sentimientos de caridad” la población se sumase a la causa de obtener la gracia del indulto. El diario recogía el guante y con el mismo propósito aprovechaba para rememorar la figura y el legado de José Canalejas, que fue “adverso a la ejecutoria por la pena de muerte”. El artículo concluía con un llamamiento a la cooperación de toda la prensa y al apoyo de las personalidades y representantes políticos, instituciones y organizaciones que conformaban la sociedad civil de la ciudad: “para que la misericordia resplandezca con su bandera, con su lema: Odia el delito y compadece al delincuente”²⁶.

La campaña lanzada por el periódico en consonancia con aquella célebre frase inscrita en la entrada de la Cárcel Modelo de Madrid tenía en su contra ciertos elementos de peso para permitir que prosperase con facilidad: la incuestionable culpabilidad del reo y la atrocidad del delito. ¿Cómo conseguir que la población se involucrase en una campaña de apoyo y movilización por un crimen así? *El Eco Toledano* tampoco podía acogerse a errores procesales, factores políticos, identitarios o comunitarios para conseguir los necesarios apoyos sociales de la ciudadanía toledana en favor del indulto, no había lugar para ninguno de ellos. Sin embargo, el periódico trataba de hacerlo apelando a lo que denominaba el “sentimiento humanitario” y las “corrientes progresivas” que con el devenir de los tiempos habían dulcificado “el

²⁶ “Sentencia de muerte confirmada. Recabemos el indulto”, *El Eco Toledano*, 21-4-1914.

sentido de las leyes penales”²⁷. Las primeras organizaciones sociales en responder y sumarse a la campaña se expresaban en términos similares a los del diario. El Casino republicano, denominado desde 1906 Centro Instructivo de Obreros Republicanos, expresaba en una carta publicada en la prensa que “faltaría a sus deberes de humanidad si no uniera su modesta petición a la de todos los que lo han hecho y han de hacer para solicitar de los Poderes públicos aconsejen el indulto, y que le prive a Toledo de un día de tristeza, y a España entera, que lo verá con satisfacción”²⁸.

En los días siguientes, periódicos tan dispares en su línea editorial como *El Castellano*, *Patria Chica*, *El Porvenir*, *El Heraldo*, *El Día de Toledo* y *La Decisión*, se sumaban públicamente a la petición de indulto acogiéndose a ideas o conceptos de raíces cristianas o humanistas. *El Castellano*, órgano de expresión del arzobispado y el catolicismo social en la provincia, apelaba a la piedad y la misericordia por ser valores “muy noble[s] y muy cristiano[s]”. De este modo, instaba a la actuación de personas influyentes “para que la justicia sea endulzada por la clemencia, y para que Toledo no se despierte un día con la ingrata sorpresa de que, al cabo de muchos años, el siniestro patíbulo se ha vuelto a levantar dentro de sus muros”²⁹. *Patria Chica*, la voz del maurismo en la provincia, señalaba la conveniencia de evitar “el duelo que la ejecución de la fatal sentencia produciría en nuestra población”³⁰. La Casa del Pueblo llegaba a calificar al reo de “desdichado”³¹. Más lejos aún iba el semanario tradicionalista *El Porvenir*, que lo presentaba como una “muy probable” víctima de los “abandonos culpables de una sociedad que se preocupa más de la esplendidez de una civilización material que de la acción educativa que regenera a los hombres haciéndoles miembros útiles y dignos para el desenvolvimiento armonioso de las actividades sociales”³². El semanario conservador *La Decisión*, recordaba ese quinto mandamiento sancionado por la moral cristiana y clamaba un “seamos humanos”³³.

Esta opinión vertida por la prensa local, en general, resumaba un sentimiento compartido de desagrado ante la decisión del alto tribunal de devolver a Toledo una práctica punitiva que rememoraba los años más convulsos del siglo anterior y que se creía por fin desterrada de las lindes y la memoria colectiva de la pequeña ciudad

²⁷ *Ibíd.*

²⁸ *Ibíd.*, 22-4-1914.

²⁹ “Pidiendo misericordia”, *El Castellano*, 22-4-1914.

³⁰ “Por el indulto”, *Patria Chica*, 23-4-1914.

³¹ “Ante la última pena”, *El Heraldo*, 24-4-1914.

³² “Condenado a muerte”, *El Porvenir*, 23-4-1914.

³³ “Odia al delito...”, *La Decisión*, 26-4-1914.

castellana³⁴. Algunas de las opiniones distaban de ser novedosas entre voces abolicionistas y crónicas periodísticas. La noticia de *La Correspondencia de España* sobre la ejecución de los tres bandoleros en 1882 utilizaba también expresiones como “terrible acto”, “triste comitiva” o “humanitarios sentimientos” para dotar a la narración de un tono emocional dramático y conmovedor. Ahora bien, los bandoleros eran insistentemente calificados como “criminales” sobre los que recaían tan graves acusaciones que ni el gobierno podía admitir la petición de indulto, como si se tratase de un destino merecido e inevitable que la población reconocía con su “apiñada” presencia en la ejecución pública³⁵. En 1914, en cambio, una prensa local más numerosa y diversa que décadas atrás tendía a sustituir la consideración de criminal por la recurrente de “condenado”, “reo” o “un semejante nuestro”, y para muchos de estos periódicos un crimen tan cruel sólo podía entenderse porque el acusado debía ser en realidad un “perturbado”, “desdichado”, “depravado”, “degenerado”, “anormal”, “enfermo y como consecuencia irresponsable”. En estas circunstancias, la ejecución podía evitarse³⁶.

Las diferentes expresiones de turbación, vergüenza, compasión o censura recogidas de la prensa en estos episodios ante la pena de muerte podrían ser consideradas el reflejo de un profundo cambio en las sensibilidades. Emociones, pasiones, afectos o sentimientos han estado siempre presentes en la toma de decisiones individuales, en los comportamientos humanos, la formación de grupos o movimientos sociales y en todo proceso histórico. El reciente interés de la historiografía por esta nueva perspectiva de análisis empieza a demostrar la importancia de lo emocional en los procesos de cambio. Además las emociones han dejado de considerarse algo eminentemente innato o una constante antropológica para atribuirles un componente aprendido que se adquiere, experimenta o transforma en un contexto cultural determinado. Esto significa que las emociones pueden y necesitan ser historizadas. Parafraseando a Ute Frevert, el miedo, la alegría, el odio, la codicia o la confianza no han sido emociones desconocidas en el pasado, lo que ha podido cambiar en el devenir histórico es lo que provoca temor y enfado, genera pena y compasión o despierta el orgullo³⁷. La sombra de Norbert Elias sigue siendo alargada en el marco de este objeto de estudio, a pesar de haberse convertido en blanco fácil de los nuevos trabajos que

³⁴ CERRO MALAGÓN (2007).

³⁵ “Edición de la noche”, *La Correspondencia de España*, 15-3-1882.

³⁶ Esta sucesión de conceptos fue utilizada por los periódicos arriba citados en los numerosos artículos que dedicaron a la campaña de indulto desarrollada entre el 21-4-1914 y el 9-5-1914.

³⁷ FREVERT (2014): 36.

revisitando su obra han encontrado algunos excesos teleológicos, eurocéntricos y difusionistas, estrictamente desde arriba, en su modo de entender el proceso de civilización. No obstante, muchos de sus planteamientos teóricos siguen gozando de buena salud, especialmente su interés por encontrar en el control de las emociones vínculos o explicaciones políticas³⁸.

Los cambios culturales que encarnan nuevas emociones o sensibilidades han dejado algunas huellas en los usos y actitudes frente a la violencia estatal. La pena capital empezó a percibirse más prescindible para el mantenimiento del poder y más brutal una vez que la nueva autoridad quedó establecida y las ejecuciones fueron disminuyendo. El lenguaje de la civilización y la sensibilidad humanitaria fue ganando terreno de este modo en el marco del liberalismo político, al calor de las corrientes de pensamiento que abogaban por la limitación del poder coercitivo del Estado, defendían los derechos y libertades de los individuos, pretendían un mayor control democrático del gobierno y las instituciones políticas, aspiraban al bienestar de los ciudadanos y cuestionaban la utilidad disuasoria o ejemplarizante de la crueldad y los castigos corporales. Los nuevos usos de la pena capital guardaban estrecha relación con amplios cambios culturales en las élites sociales que, bajo imperativos como el respeto a la vida y a los individuos, comenzaban a rechazar la violencia física, el sufrimiento o, al menos, su exposición en público, y criticaban la “insensible vulgaridad” de las multitudes que seguían yendo a presenciar las ejecuciones públicas. Formas de crueldad que alguna vez habían sido incuestionables llegarían a convertirse en objeto de crítica y debate constante, más incómodas o difíciles de justificar por sus propios defensores³⁹.

El rechazo a la pena de muerte creció desde finales del siglo XVIII y las primeras reformas penales que trataron de abolir o restringir su aplicación en el último tercio del XIX se convirtieron en símbolo de civilización y principio de movimientos progresistas, republicanos y demócratas en toda Europa. A finales de siglo algunos países europeos ya habían abolido la pena capital y prácticamente todos habían prohibido las ejecuciones públicas, salvo España y Francia⁴⁰. El debate político y

³⁸ ELIAS (2000). La obra de Norbert Elias y el auge de una nueva historia de las emociones ha merecido la reciente publicación en revistas españolas de dossieres coordinados por RODRÍGUEZ-LÓPEZ (2014); y BOLUFER (2015).

³⁹ GARLAND (2013): 214; SPIERENBURG (1984).

⁴⁰ Los países que la habían abolido eran Portugal en 1867, salvo para los delitos militares, Países Bajos en 1870 y Suiza en 1874, mientras que en otros se empleaba sistemáticamente el derecho de gracia, como en Bélgica desde 1863 e Italia desde 1876. Las ejecuciones públicas fueron prohibidas en Inglaterra en 1868, en Alemania y Suecia en 1877, en Polonia en 1880, en Rusia en 1881 y en Noruega en 1887. En Francia no quedarían prohibidas hasta 1939. Véase, PULIDO (1897).

jurídico en España, bien estudiado por José María Puyol, se inclinaba claramente en los años del Sexenio Democrático a favor de reducir la crueldad de la ejecución y limitar su publicidad. La Junta Superior revolucionaria señaló la abolición como “uno de los derechos del pueblo” y las Cortes fueron el escenario de varias proposiciones de ley, peticiones y presentación de firmas de representantes de ciudades, instituciones y particulares que solicitaban la abolición⁴¹. Muchos de los penalistas más influyentes del momento, todavía impactados por el recuerdo de las ejecuciones que en alguna ocasión habían presenciado, lo consideraban un acto repugnante que transgredía la sensibilidad de la población, atentaba contra la dignidad del reo e invitaba a sentir compasión por él. Concepción Arenal escribía en una de sus obras publicada en 1867 que la vista del reo y del patíbulo “aflige, aterra, trastorna a la persona buena, que no ha menester de la terrible lección”. El que fue ministro de las carteras de Gobernación, de Gracia y Justicia, fiscal y presidente del Tribunal Supremo, Pedro Gómez de la Serna, manifestaba en 1869 que “este castigo bárbaro que nuestros antepasados consideraron como grandemente ejemplar y preventivo de los delitos, [...] no lo permite ya la cultura del siglo”. Otro prestigioso jurisconsulto, Fernando Calderón y Collantes, en un discurso pronunciado en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1871, afirmaba en este mismo sentido: “esperemos que el desarrollo progresivo de la civilización, suavizando las costumbres, haga innecesario aquel cruento castigo. Entonces dejará de ser legítimo y desaparecerá por el incontrastable influjo de una opinión madura e ilustrada, sin peligro de la sociedad, para gloria de España y consuelo de cuantos respetamos la dignidad y la vida del hombre”⁴².

El debate se enfrió durante los primeros años de la Restauración y ningún diputado volvió a presentar en las Cortes una propuesta de abolición hasta 1893, cuando la aplicación de las ejecuciones públicas empezaba a reducirse⁴³. Las proposiciones de ley y proyectos de reforma del código penal que trataban de restringir las ejecuciones públicas o llevarlas al interior de las prisiones sí reaparecieron en la década de 1880, pero fracasaron debido a las circunstancias políticas. En la proposición de ley que presentó el marqués de San Carlos se preguntaba si las ejecuciones capitales en la España de entonces no eran un acto “indigno de un pueblo civilizado y cristiano”. En el mismo debate, otro diputado exclamaba que “de los progresos de la civilización, está el

⁴¹ PUYOL MONTERO (2001): 137-145.

⁴² *Ibidem.*: 81, 102 y 88.

⁴³ *Diario de Sesiones de las Cortes*, legislatura 1892-1893, tomo 320, p. 2.890.

procurar que vaya esa pena perdiendo todo lo que pueda tener de su horror y de su crueldad”⁴⁴. Un mes más tarde, y tras una nueva ejecución pública en Madrid, otro diputado rogaba al ministro de Gracia y Justicia que tomase medidas con el fin de evitar la reproducción de relatos minuciosos en la prensa, “para que la muerte de un hombre no se convierta en un negocio periodístico”⁴⁵. Casi dos décadas más tarde, Ángel Pulido, promotor de la reforma legal que acabó con las ejecuciones públicas acusaba igualmente a la prensa que cubría con elementos morbosos las ejecuciones de “herir a mansalva la inadvertida sensibilidad de sus lectores y dejar en ella perjudicialísimas y falsas impresiones”. Partidario de la completa abolición pero igualmente pragmático en sus demandas, abogaba por “reducirla y humanizarla cuanto sea posible con el fin de evitar a la sociedad los daños que por efectos emocionales y reflejos hemos demostrado que padece, y evitar al reo cuanto pudiera convertirle en víctima, real o aparente, de venganza, crueldad o castigo extremado”. Tras un par de intentos rechazados por el Congreso en 1896 y 1898, posiblemente por la situación que se vivía en Cuba, la actividad anarquista y la represión estatal, su proposición fue finalmente aprobada dos años más tarde con una redacción que concluía diciendo: “cumple a la cultura de un pueblo civilizado, y a la recta administración de una justicia sabia y humanitaria hacerlo desaparecer”⁴⁶.

Existía en la opinión de todos éstos cierta esperanza en el progreso de la civilización, entendido éste como un proceso evolutivo en el que los sentimientos humanitarios y compasivos ocupaban un lugar central. En este sentido, hace ya algunos años José María Jover Zamora dedicó un artículo a desentrañar lo que él denominó el “tono de la vida”, el “clima moral” o los “fundamentos humanos” de la transición intersecular. Basado fundamentalmente en fuentes literarias afirmaba que los nuevos vientos culturales que soplaban sobre Europa en el fin de siglo habían traído una nueva concepción del mundo y de la vida, un naturalismo más hondo en el que la sensibilidad, la comprensión del marginado y la aproximación al que sufre se manifestaban como la nueva esperanza del cambio social. La consulta de mayor número de fuentes quizás podrían haber alertado al referido autor de la paralela gestación de un darwinismo social de conocidas consecuencias en otros ámbitos políticos y sociales del momento. No obstante, en este ambiente cultural complejo en el que se descubre la cuestión social a la

⁴⁴ *Ibíd.*, legislatura 1879-1880, pp. 1.080-1.083.

⁴⁵ *Ibíd.*, legislatura 1879-1880, p. 1576.

⁴⁶ PULIDO (1897): 139-140, 189 -190 y 210-213.

vez que se teme a las multitudes, las emociones hacia una muerte prevista, cuya ejecución pende de una libre decisión humana, pudieron cobrar una especial intensidad en algunos sectores de la burguesía y las clases medias urbanas, las que se expresaban en la prensa, en la literatura, y que tantos conmovedores relatos dejaron acerca de las ejecuciones públicas de la mano de Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán o Pío Baroja⁴⁷. También dejaron su huella en los debates de la ciencia penal, en los que las tendencias correccionalistas y positivistas ganaban terreno al retribucionismo⁴⁸. El fiscal del Tribunal Supremo en 1910, de convicciones demócratas, lo manifestaba así en uno de los párrafos de su *Memoria* elevada al gobierno:

“Ninguna dureza, que no somos vengadores de males, que tendríamos que castigarnos a nosotros mismos, copartícipes sociales de los errores que engendran los delitos. Esta es la tendencia moderna de la penalidad, y si no podemos romper de un golpe con el triste pasado, de cuyas raíces estamos llenos, debemos suavemente, reconocido el error, borrarlo de la trayectoria social”⁴⁹.

Otra serie de cambios en los procedimientos del sistema jurídico y punitivo descubren la existencia de algunas de estas presiones culturales en la acción de los legisladores. Junto a la retirada de las ejecuciones al interior de las prisiones, los tiempos de estancia en capilla quedaron reducidos a 18 horas, lo que aminoraba la agonía del tiempo de espera. En las salas de justicia cada vez era más frecuente la lectura de informes psiquiátricos o médicos que trataban de descargar la responsabilidad del reo y contrarrestar las agravantes de premeditación y alevosía, tan íntimamente relacionadas con las condenas a la pena capital. Las sentencias de pena de muerte, como ya se ha comentado, experimentaron un claro retroceso desde principios de siglo y la mayoría de ellas acababan conmutadas a cadena perpetua por la vía del indulto. La necesidad de reformar las cárceles y dulcificar ciertas penas se presentaba como una señal de racionalización del castigo, pero también de adaptación a los nuevos tiempos, esto es, de civilización y humanidad. La pena privativa de libertad había conseguido convertirse en el castigo más emblemático del orden social liberal y estaba conformando una nueva cultura punitiva en la sociedad⁵⁰. El semanario toledano *La Decisión*, lo

⁴⁷ JOVER ZAMORA (1997).

⁴⁸ Las corrientes de pensamiento retribucionistas en el debate penal abogan porque el castigo sea semejante al daño causado, sin que la pena persiga mayor fin que la misma imposición del castigo. Véase, BURILLO ALBACETE (2011).

⁴⁹ *Memoria elevada al Gobierno de S.M. por el Fiscal del Tribunal Supremo*, 1910, p. 97.

⁵⁰ OLIVER OLMO (2008): 75-97

manifestaba claramente en los días en los que se clamaba por el indulto de Aniceto Camuñas:

“A un ser depravado, de malos instintos, borracho de malos pensamientos o ejecutor de un solo pensamiento malo, hay que repararlo de la sociedad, aislarlo de los hombres buenos, recluirle y hacerle padecer su mal proceder, castigarle en forma que se entere del castigo, esto es: viviendo.

Para eso se hicieron esos edificios donde quedan muchos sufriendo sus culpas.

Y si en las cárceles se enseñara a los reclusos el camino de la reivindicación, podrían volver al mundo de los libres, seres sanos que expiaron su delito dignificados, honrados hasta cierto punto”⁵¹.

La retirada del patíbulo al interior de las cárceles y la paulatina disminución de su aplicación, lejos de aspiraciones gubernamentales por mostrar unas ejecuciones más moderadas y justificadas, acabó provocando que estos castigos pareciesen más brutales, innecesarios, extraños o ilegítimos para la mirada de los contemporáneos. La desaparición del ritual, de sus formas culturales, sus significados sociales o atractivos emocionales, y su sustitución por un mero procedimiento penal rápido, eficaz, prácticamente oculto y sin apenas elementos comunicativos, socavaba esas tradicionales funciones de exhibir la autoridad, disuadir a los delincuentes o expresar el sentimiento público⁵². La pena capital había perdido su forma de ser narrada, su manera de mostrarse inteligible o convincente, y se situaba en constante contradicción con el sistema penal y con lo que Jan Plamper ha denominado las “normas emocionales” y culturales que impregnaban a la sociedad⁵³. Con el nuevo siglo, las Cortes se convirtieron en escenario habitual de las repetidas proposiciones de abolición del diputado republicano Luis Morote, movido por el “ejemplo de los países” y “la corriente del humanismo actual, que ha ensanchado con amplitudes no previstas la esfera de acción del Estado en beneficio de todos los individuos y especialmente de las clases sociales más menesterosas”⁵⁴. También de proposiciones que instaban a reformas en el código penal para que la *Gaceta* no apareciese “todos los días indultando a criminales”⁵⁵; y de peticiones de diputados para que se indultase a los reos de sus circunscripciones o se les ejecutase fuera de ellas. Así lo manifestó un diputado por Sevilla, que afirmaba que la ciudad no había presenciado una ejecución desde hacía 34

⁵¹ “Odia al delito...”, *La Decisión*, 26-4-1914.

⁵² SMITH (2008).

⁵³ PLAMPER (2014).

⁵⁴ *Diario de Sesiones de las Cortes*, nº 130, Apéndice 6ª, 12-11-1906, p. 3.805. La figura de Luis Morote, en PÉREZ GARZÓN (1976).

⁵⁵ *Ibidem*, 26-11-1906, p. 4.257.

años y que todo el pueblo era “completamente opuesto a que se cumpla allí la terrible sentencia”⁵⁶.

La petición de este diputado sugiere la necesidad de advertir la distancia que en ocasiones puede mediar entre el terreno de las emociones y el de las ideas políticas. Si retornamos al Toledo de 1914, descubrimos que los más de diez periódicos que entonces se publicaban en la ciudad se mostraron contrarios a la ejecución. Todos secundaron la campaña protagonizada por *El Eco Toledano* y celebraron el indulto, todos mostraron elementos de una nueva sensibilidad que reaccionaba ante una inmediata ejecución en su entorno más cercano, pero no todos compartían la misma doctrina sobre la legitimidad y vigencia de la pena de muerte en el marco político y jurídico. Días después de conseguir el indulto, *El Castellano* manifestaba esas divergencias en su editorial: “Durante unos días no hemos hablado de otra cosa. [...] Un ser degenerado, que cometió un crimen atroz, ha preocupado a toda una ciudad. Esto dice mucho en favor de nuestros sentimientos. La efusión de sangre nos aterra. [...] pero no podemos estar conformes con todo lo que se ha dicho para justificar la concesión del indulto. [...] No han faltado quienes, llevando la cuestión a sus principios, han defendido el indulto combatiendo la pena de muerte, que consideran como recuerdo de tiempos bárbaros. Y eso ya es avanzar demasiado”⁵⁷. Los dardos iban dirigidos contra *El Eco Toledano*, diario que desde el primer día no ocultó su tono abolicionista y que publicó la opinión de un histórico del republicanismo toledano, Nemesio Labandera, en el que se podía leer: “Muchas razones hay para odiar la pena de muerte; la odiamos, porque la pena de muerte no es necesaria para el orden social; la odiamos; porque la pena de muerte es un espectáculo inmoral; la odiamos, porque la pena de muerte no es reformadora; la odiamos, porque la pena de muerte no es ejemplar; ni es remisible, ni es reparable, ni es personal, ni es cristiana”⁵⁸.

El abolicionismo había experimentado significativos avances, pero su desarrollo fue mucho más transitorio y expuesto a involuciones desde que la Gran Guerra, los procesos revolucionarios y los movimientos contrarrevolucionarios propiciasen un nuevo escenario de violencia y brutalización de la política. Los años que estaban por llegar no fueron los mejores para el cumplimiento de las garantías judiciales. El espacio

⁵⁶ *Ibíd.*, 27-10-1906, p. 3.451. Otra petición de indulto días más tarde de un diputado por Ceuta en *Ibíd.*, 9-11-1906, p. 3.725.

⁵⁷ “La pena de muerte”, *El Castellano*, 2-5-1914.

⁵⁸ “La pena de muerte”, *El Eco Toledano*, 24-4-1914. Una lectura más extensa de este debate, en BASCUÑÁN AÑOVER (2015).

que dejó el paulatino descenso de la muerte legal pronto fue ocupado por otras expresiones de violencia política procedentes de los máuser de la Guardia Civil, del pistolero o las ejecuciones extrajudiciales bajo custodia de agentes policiales en los últimos años de la Restauración. En este contexto, la pena de muerte se mantuvo firme en los códigos de justicia civil y militar hasta que en 1932 el nuevo régimen republicano trató de romper con el pasado⁵⁹. No obstante, las nuevas sensibilidades en torno a la pena capital, las emociones de compasión y humanidad por el condenado a muerte, habían avanzado en la sociedad de un modo más transversal que el abolicionismo. La prensa del momento, estrechamente vinculada a las organizaciones políticas y sociales en liza, no sólo jugó un papel principal en la difusión de ideas y opiniones, sino también en la propagación de estas sensibilidades. Todos los periódicos toledanos rechazaban la posibilidad de una inminente ejecución en su ciudad a la altura de 1914, aunque sólo republicanos, demócratas y socialistas se opusiesen frontalmente a la vigencia de la forma de castigo más severa del sistema penal. La campaña a favor del indulto parecía llegar en un momento oportuno.

La campaña de movilización a favor del indulto

Dos días después de que se conociese públicamente la noticia de la sentencia de muerte, *El Eco Toledano* ofrecía nuevamente en primera página una amplia información titulada: “Toledo en masa solicita el indulto”. En ella encarecía a todas las corporaciones de la ciudad “tanto civiles como religiosas”, que enviasen telegramas al presidente del Consejo de Ministros para recabar el indulto del reo. Con el objeto de alentar y facilitar esta campaña de mensajes al Gobierno, reproducía íntegramente las cartas enviadas por la defensa a Alfonso XIII y a Eduardo Dato. El periódico informaba también de las gestiones realizadas por la comisión enviada a Madrid para entrevistarse con las más altas autoridades del Estado y de la inmediata partida de nuevas comisiones formadas por el vicario capitular y representantes de los padres Jesuitas y Carmelitas de la ciudad, la Diputación, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio, el Colegio de abogados, el de procuradores y el de farmacéuticos, la Casa del Pueblo, los dependientes del comercio y la Hermandad de la Paz y Caridad. Las firmas, a su vez, ya habían empezado a recogerse en el Café Español, el Centro de Artistas y otros establecimientos de la ciudad. Un nuevo artículo del procurador de la defensa buscaba

⁵⁹ GONZÁLEZ CALLEJA y REY REGUILLO (1995); GONZÁLEZ CALLEJA (1999); ROMERO SALVADÓ (2008 y 2014).

enardecer los ánimos de la población para ampliar los apoyos sociales de la campaña: “Uníos todos a la representación del reo, y sin excepción de clases ni personas, pidamos el indulto de Aniceto Camuñas, que más que un criminal, es un enfermo”⁶⁰.

La campaña a favor del indulto se presentó como una buena ocasión para desplegar algunas de las prácticas más habituales del paternalismo, aumentar el prestigio o el reconocimiento de las autoridades locales en la comunidad: adhesiones públicas de los representantes de las principales instituciones, formación de comisiones y desplazamiento a Madrid para conseguir entrevistas con diputados y miembros del gobierno. No obstante, en apenas dos días aparecían otros recursos necesarios para movilizar a la opinión pública que más bien parecían propios de los movimientos sociales: informaciones continuas y artículos contra la pena de muerte dotados de una fuerte carga emocional para impactar a los lectores, declaraciones en la prensa de sociedades profesionales, asociaciones políticas y de oposición y su participación en las comisiones, llamamientos al envío masivo de cartas al Consejo de Ministros y recogida de firmas en los círculos, casinos, cafés y demás lugares centrales de la sociabilidad toledana. Al tercer día de campaña, *El Eco Toledano* llamaba en sus páginas “a la manifestación” para esa misma tarde, cuando posiblemente contaba con mayores certezas sobre la fuerza real de sus apoyos sociales⁶¹. La convocatoria parecía obedecer al guión predefinido de un repertorio de movilización que concluye o alcanza su cima con un acto público y demostrativo en la calle⁶².

La manifestación había conseguido el apoyo de la alcaldía y del presidente de la Asociación de la Prensa de Toledo, que se encargaron de obtener los permisos necesarios del gobernador civil para llevar a cabo de manera inmediata un acto público de estas características. Durante esa misma mañana se distribuyó por las calles, cafés y comercios de la ciudad una alocución en la que se excitaba a la población a sumarse a la manifestación y al comercio a cerrar sus puertas durante las horas del recorrido. A pesar de la urgencia de los preparativos, los apoyos eran suficientemente amplios y diversos, especialmente entre aquellas asociaciones que ya demostraban una especial capacidad y organización para movilizar a sus socios o militantes y actuar en defensa de intereses colectivos. El presidente de la Cámara de Comercio asumía el reto con la publicación de una nota en la que suplicaba “a los comerciantes e industriales, se dignen cerrar sus

⁶⁰ “Toledo en masa solicita el indulto”, *El Eco Toledano*, 23-4-1914.

⁶¹ *Ibidem*, “La ejecución es inminente”, 24-4-1914.

⁶² TILLY (2007 y 2009); y CRUZ (2008 y 2015).

establecimientos a las cinco y media de la tarde y asistir a la manifestación proyectada”⁶³. La Casa del Pueblo tomó también parte “importantísima y entusiasta” en la convocatoria con un llamamiento en el que recomendaba la asistencia a sus socios “queridos compañeros, que tan solícitos os mostráis en todo momento que el deber os llama a manifestaros”⁶⁴.

Los diversos testimonios que dieron cuenta de la manifestación coincidieron en subrayar su amplio seguimiento. El semanario *La Decisión* apuntaba que la “sentida manifestación” fue secundada por “autoridades de todos matices” y “todas las clases de la sociedad en muy crecido número”⁶⁵. *El Castellano* señalaba el “inmenso gentío” que llenaba la plaza del Ayuntamiento y la “inmensa muchedumbre” a la que se dirigió desde su balcón el gobernador civil antes de que la manifestación se disolviese “pacíficamente” y el comercio volviese a abrir sus puertas. El órgano de expresión católico destacaba que entre los concurrentes “eran numerosísimos los obreros”, aunque no se le olvidaba añadir que “abundaban también los sacerdotes”⁶⁶. Como siempre, el más entusiasta de los rotativos con la causa era *El Eco Toledano*, que abrió su primera página con el titular “Una manifestación grandiosa”. En el minucioso relato de los hechos hacía referencia a la “imponente y silenciosa muchedumbre” que recorría las calles de la ciudad y la “multitud inmensa” que invadía el lugar de partida de la manifestación. La marcha por las calles hasta el Gobierno Civil proporcionaba una excelente ocasión para que en su cabecera se dejasen ver el alcalde y los concejales del Ayuntamiento, cargos y dignidades eclesiásticas, pero junto a ellos y restándoles protagonismo aparecían representantes de la Cámara de Comercio, de la Casa del Pueblo, la Asociación de la Prensa y el Centro Republicano, además de otras sociedades y “millares de personas de todas las clases sociales”. La tan comentada presencia de sectores populares y obreros despertaba una mayor reflexión en este periódico:

“El elemento obrero daba una nota muy digna de estimación. Ya no son estos trabajadores, aquellos que en un día de ejecución de un reo, cogían a sus familias, o a sus amigos, y en gran algaraza se dirigían hacia el sitio donde se alzaba la picota, provistos de meriendas con las que habría de celebrarse una francachela, como si el motivo para ella fuese el júbilo de una romería...”

Ya ha variado la película: los obreros de la actualidad, poseen otra ilustración muy distinta a los de antaño, y saben lo que son las corrientes modernas; están enterados de cómo se piensa en la humanidad civilizada; [...].

⁶³ “Una manifestación grandiosa”, *El Eco Toledano*, 25-4-1914.

⁶⁴ “Ante la última pena”, *El Heraldo Toledano*, 24-4-1914.

⁶⁵ “Odia al delito...”, *La Decisión*, 26-4-1914.

⁶⁶ “Una manifestación”, *El Castellano*, 26-4-1914.

Por eso, en la manifestación de ayer, hubieron de acudir en crecidísimo número a protestar, junto a las demás entidades, de que en esta imperial ciudad quede el sello de una muerte a garrote [...]”⁶⁷.

El recuerdo de las multitudes arremolinadas frente a los patíbulos en días de ejecución aún pesaba en la imaginación o los temores de sectores ilustrados y clases medias urbanas. Las palabras del articulista denotaban alivio y satisfacción por el cambio experimentado en el “elemento obrero”, como si las clases populares y obreras se hubiesen distinguido de las demás por una especial predisposición a la crueldad o fuesen las únicas que habían promovido, consentido y asistido a estos espectáculos de sufrimiento en épocas pasadas. Documentar la agudización del sentimiento de compasión hacia los reos entre los grupos más débiles de la población urbana y explicar las razones de este cambio es una labor aún mucho más compleja. Lo que sabemos de sus sentimientos o emociones es más bien poco. Sus testimonios y opiniones no solían quedar reflejadas en la prensa u otro tipo de fuentes. Del mismo modo, la persistente existencia, especialmente en la geografía rural, de puntuales linchamientos y motines contra vecinos que habían cometido delitos de sangre, contra las formas habituales de proceder de la justicia ordinaria en la custodia de los detenidos o en la instrucción de la causa, indica que los cambios en este sentido pudieron ser zigzagueantes y no exentos de contradicciones⁶⁸.

No obstante, la contrastada presencia de obreros en la manifestación de Toledo ofrece sobradas razones para pensar que se encontraban en estrecha consonancia con la opinión pública propagada en la prensa por los sectores ilustrados de la ciudad, que se compadecían del reo y ansiaban igualmente la llegada del indulto. Al fin y al cabo, la sociedad de principios del XX había dejado de estar familiarizada con el espectáculo brutal de la ejecución pública y la pena de muerte en general había dejado de ser una práctica habitual en las pequeñas ciudades de provincias. Además, el paulatino proceso de socialización política de la mano del incipiente asociacionismo republicano y obrero les dotaba de unos conceptos, ideas y lenguajes que subrayaban el carácter clasista del sistema penal, la vocación represora del régimen o especialmente de algunos gobiernos, y les empujaba a mostrar una mayor proximidad con la condición social o política de la mayoría de los reos, más aún cuando todavía seguía reciente en el recuerdo y en el

⁶⁷ “Una manifestación grandiosa”, *El Eco Toledano*, 25-4-1914.

⁶⁸ BASCUÑÁN AÑOVER (2008).

debate público las contestadas ejecuciones tras la Semana Trágica⁶⁹. En las últimas elecciones a concejales de noviembre de 1913, el semanario toledano de la coalición republicano-socialista, *El Centinela*, había basado la campaña en tachar a sus adversarios mauristas de “sanguinarios” y en recordar a sus lectores la conveniencia de no votar a “ese partido que acaudilla el odiado Maura”. Los motivos eran insistentemente repetidos en sus páginas:

“Huelga el que recomendemos a republicanos, socialistas y obreros, no voten a ninguno de estos señores pertenecientes a ese partido acaudillado por Maura y Cierva, esos políticos a quienes anatemizó la Europa culta, los que fusilaron a Ferrer y al idiota Clemente García, los que acribillaron a balazos a infelices obreros en Infesto y Jumilla, los que promovieron los sangrientos sucesos de Osera, los que bajo el plomo del máuser hicieron morir a los estudiantes en Salamanca, los que nos llevaron a la guerra con Marruecos, a esa guerra que arrebató y arrebatará millares de hijos y millones de dinero”⁷⁰.

La brutalidad con la que el Estado respondió en tantas ocasiones a las acciones de los combativos movimientos sociales, a las demandas obreras y populares, pudo contribuir al rechazo hacia las formas más severas de represión y castigo entre las clases subalternas. Víctor Lucea lo ha mostrado de manera esclarecedora en uno de sus trabajos de referencia: las ejecuciones que se enmarcaban en ambientes de tensión social y política ya habían provocado la participación de mujeres y obreros en algunas de las manifestaciones más explícitas contra la pena capital a finales del XIX, desde las del célebre caso Conesa en la ciudad de Zaragoza hasta las de los procesos de Montjuic. De este modo, el conflicto político y social en estas fechas pudo actuar como un factor más que amplió o llevó la sensibilización contra la pena de muerte hacia aquellos grupos sociales que décadas atrás habían sido espectadores habituales de las ejecuciones. Pero además, había puesto a disposición de los actores sociales una serie de recursos y estructuras que favorecían la movilización social a través de formas que se pretendían menos violentas, más cívicas y tendentes a la negociación⁷¹.

Lo cierto es que el Toledo de 1882 quedaba muy lejos en ese aspecto del de 1914. En esta última fecha, la hegemonía del turno y la cultura política clientelar estaba siendo desafiada en los procesos electorales locales, obligada a competir con carlistas, mauristas, católicos, republicanos, demócratas y socialistas, además de a convivir y

⁶⁹ SUÁREZ CORTINA (1999); TOWNSON (1994); y ÁLVAREZ JUNCO (1990).

⁷⁰ “Chismorreo electoral”, *El Centinela*, 24-10-1913. Otras alusiones del mismo periódico durante la campaña electoral a la responsabilidad personal de Maura en los fusilamientos en “Consejos electorales”, 30-10-1913; y “Piropos sueltos”, 8-11-1913.

⁷¹ LUCEA AYALA (2002 y 2009).

negociar con otras sociedades profesionales y de intereses. El republicanismo toledano había conseguido en la primera década del XX llegar a ser con diez concejales la segunda fuerza en el Ayuntamiento y gozar de gran respeto y seguimiento por el perfil cultural e intelectual de muchos de sus líderes, entre los que se encontraba Julián Besteiro. Estas incipientes organizaciones consiguieron desarrollar una interesante red asociativa, con sus propios órganos de prensa, círculos, casinos, celebraciones, banquetes, sociedades, mutualidades, juventudes, sindicatos y partidos que pretendían llegar a la opinión y el debate público, construir y socializar nuevas identidades políticas, movilizar intereses colectivos y acceder o influir en la toma de decisiones del gobierno municipal⁷². Las campañas de opinión y movilización social ya no eran tan ajenas al ambiente de la capital provincial, que había sido escenario de episodios en los que la disputa política apelaba a nuevos comportamientos electorales y repertorios de acción colectiva, especialmente a partir de los comicios de 1909 y la llegada al poder de José Canalejas en 1910, en los que se configuraban actores políticos enfrentados a propósito de la cuestión religiosa que se lanzaban a la calle con multitudinarias manifestaciones y mítines en el teatro Rojas⁷³.

La ciudad estaba inmersa en un proceso de transformación política y social en el que crecía una ciudadanía vinculada a grupos de afinidad de ámbito nacional, que mostraba inquietud por problemáticas que rebasaban con mucho el marco local y que demandaba mayores derechos colectivos, renegociación de la convivencia y ampliación de la participación política mediante nuevas formas de movilización social⁷⁴. Los tradicionales motines de subsistencia no habían abandonado todavía las calles de la ciudad, menos aún de la provincia, pero en la pugna e interlocución política ganaban terreno y ocupaban el espacio público nuevas formas de llamar la atención o desafiar a las autoridades, de demostrar fuerza y encontrar reconocimiento. La manifestación, en concreto, se convirtió en una herramienta de poder e influencia, en una expresión de la opinión pública y representación de la soberanía popular⁷⁵. De ahí el interés de la prensa toledana en remarcar la gran concurrencia a la manifestación en favor del indulto y la insistencia en subrayar su composición interclasista, la participación de representantes de fuerzas políticas diversas y enfrentadas, el ambiente cívico y el carácter pacífico con la que se desarrolló, así como el modo en que el gobernador civil reconoció sus

⁷² CRESPO JIMÉNEZ (2015 y 2008); DE LA CASA NAVARRO (1992); y LÓPEZ LÓPEZ (1985).

⁷³ RAMÍREZ RODRÍGUEZ (2012); y DE LA CUEVA MERINO y MONTERO (2007).

⁷⁴ CARNERO (2013); PÉREZ LEDESMA (2000 y 2007) y MARKOFF (1999).

⁷⁵ CRUZ (2015).

peticiones, exponiendo públicamente que de acuerdo con el clamor de la manifestación “interpondría todas sus fuerzas y sentimientos” para evitar el cumplimiento de la “triste sentencia”⁷⁶.

En estas palabras del gobernador civil al cierre de la manifestación y en las acciones de la alcaldía en apoyo a la campaña de indulto se muestra un esfuerzo por atender a ciertas demandas colectivas. En un escenario de creciente competencia política, es más que probable que las fuerzas del turno se percatasen del potencial político de algunas reclamaciones de la ciudadanía, de la necesidad de atender a algunas de sus peticiones o de aceptar ciertas expresiones de disenso público, del cálculo electoral en la toma de decisiones y de los costes políticos de no transigir. Las nuevas formas de movilizar intereses colectivos obligaban a las facciones clientelares a redefinir las relaciones sociales con los nuevos actores políticos, desplegar mayores esfuerzos, recursos y marcos de negociación en la gestión del poder local⁷⁷. La deseada noticia se producía a mediodía del 29 de abril. En el ánimo de Eduardo Dato por aconsejar la prerrogativa de indulto en el Consejo de Ministros decía haber pesado “la altruista campaña que ha venido realizando el pueblo unánime de Toledo”⁷⁸. Llegaba el momento del alivio y de los agradecimientos a todas las autoridades, instituciones y sociedades comprometidas con la campaña. Entre ellos, destacaban los “calurosos elogios” que el alcalde dedicó en sesión plenaria “a la prensa local que de una forma tan decisiva había sabido levantar el espíritu público en favor del desgraciado Aniceto Camuñas”⁷⁹. Más explícitos fueron el abogado y procurador de la defensa, que en carta pública dirigida al director de *El Eco Toledano* le manifestaban su “profundo y sincero reconocimiento por la noble, sentida y briosa campaña que ha realizado en pro de un ideal tan levantado y altruista”. Tampoco se olvidaban del papel jugado por la población en esta campaña, que “con una elevada conciencia de dignidad ciudadana y con hermosa exaltación de nobles sentimientos, ha sabido con sus representaciones y fuerzas vivas en grandiosos actos de presencia, dar muestras de viril y prudente energía en imponente y solemne manifestación”⁸⁰.

Apenas dos semanas de intensa campaña de opinión pública y movilización social habían bastado para conseguir el indulto. Tanta permisividad contrasta con la

⁷⁶ “Una manifestación grandiosa”, *El Eco Toledano*, 25-4-1914.

⁷⁷ CABO y VEIGA (2011); PALACIOS CEREZALES (2011); y BASCUÑÁN AÑOVER (2010).

⁷⁸ “Responde el gobierno”, *El Eco Toledano*, 30-4-1914.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ *Ibidem*, “Después del indulto. Mensaje de gracias en carta abierta”, 4-5-1914.

intransigencia con la que en otras ocasiones se mostraron los gobiernos ante protestas y movilizaciones sociales de diferente significado, especialmente en los últimos años del régimen. El éxito de la campaña de indulto obedecía a la capacidad para orquestar un movimiento social en una ciudad que empezaba a estar habituada a estas nuevas prácticas colectivas de presión y negociación política, a un profundo cambio en las sensibilidades que reaccionaba contra una ejecución en su entorno y alimentaba opiniones contra las formas más severas de punición, pero también a que una petición así ya no parecía poner en cuestión la autoridad del poder o la fortaleza del gobierno, no al menos como unas décadas atrás. En la decisión del Consejo de Ministros, en su declarada voluntad de atender a la demanda del “pueblo unánime” residía la confianza de que tal concesión no abría una brecha en el orden institucional ni debilitaba las estructuras políticas preexistentes, mas al contrario, podía reafirmarlas mediante el uso político del perdón. La expansión de lo que bien podríamos considerar derechos de ciudadanía quedaba estrechamente ligada o dependiente de los procesos de afirmación del Estado. El camino, por tanto, lejos de ser lineal o evolutivo, estaba expuesto a traumáticos retornos.

A modo de conclusión

Tan sólo habían transcurrido cinco días desde la concesión del indulto, cuando en el Congreso se colaba un apasionado y extenso debate entre varios diputados con miembros del gobierno. Un reo había sido ejecutado en estas mismas fechas en Córdoba bajo los efectos de un posible estado epiléptico o de enajenación que podía haberle librado del patíbulo en el último momento. Los miembros de la Cruz Roja y los frailes de la Paz y Caridad, encargados de su asistencia, se negaron a conducirlo hacia la muerte en ese estado, lo que obligó al verdugo y el sepulturero a hacerlo en su lugar. Los periódicos nacionales ofrecieron una amplia difusión de lo que presentaron como un escándalo y varios diputados liberales, republicanos y socialistas “horrorizados” por unos “hechos tan repugnantes” exigían responsabilidades a varios ministros en “nombre de la humanidad”, aprovechaban para solicitar el indulto de cuatro reos en Guadalajara e intentaban rescatar el debate de la abolición⁸¹. El Estado ejecutaba menos de lo que lo hacía décadas atrás y cuanto menos ejecutaba, más dificultades encontraban los gobiernos para justificar su decisión en la prensa, en las Cortes y entre los electores que

⁸¹ *Diario de Sesiones de las Cortes*, 4-5-1914, 6-5-1915, y 18-5-1914.

se movilizaban y recurrentemente acudían a los diputados cuando una posible ejecución se ceñía sobre su circunscripción. La pena de muerte estaba repleta de usos políticos que explican su dilatada pervivencia en los códigos, pero su aplicación era cada vez más problemática o controvertida.

Los episodios acontecidos en Toledo no eran una excepción, ni mucho menos estaban a la vanguardia del cambio, más bien eran el reflejo de unos procesos de transformación que han pretendido ser analizados desde la óptica que proporciona el microscopio local. Muchos interrogantes han surgido a lo largo de estas páginas debido a la complejidad de un fenómeno tan poco estudiado y otros muchos que pueden no haber sido atendidos reclaman perseverar en la labor de investigación, ampliar horizontes espaciales y temporales. Ahora bien, algunas de las ideas lanzadas en este texto podrían esbozar las líneas por las que indagar. Los usos políticos de la pena de muerte, sus formas y significados, desde la ejecución pública hasta su moderación, privacidad e incremento del perdón, guardan una estrecha relación con diferentes procesos de formación y racionalización de las estructuras del poder, la aparición de nuevas sensibilidades que desplazaban la ejecución al terreno de lo inhumano e incivilizado y el desarrollo de actores políticos y formas de movilización social basadas en la demanda de derechos. Estos factores pueden ayudarnos a comprender mejor el crecimiento y las dificultades de los deseos y proyectos abolicionistas, pero también las dimensiones del trauma histórico que hubo de provocar la matanza que estaba por llegar en España y en toda Europa.

Bibliografía

- ÁLVAREZ JUNCO, José (1990): *El emperador del Paralelo: Lerroux y la demagogia populista*, Madrid, Alianza.
- BALLBÉ, Manuel (1983): *Orden público y militarismo en la España constitucional, (1812-1983)*, Madrid, Alianza.
- BAROJA, Pío (1904): *Mala hierba*, Madrid, s.n.
- BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar (2008): *Protesta y supervivencia. Movilización y desorden en una sociedad rural: Castilla-La Mancha (1875-1923)*, Valencia, Fundación Instituto Historia Social.
- BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar (2010): “Caciquismo, cambio y conflictividad social durante la Restauración”, en A.R. Valle Calzado (coord.), *Historia agraria de Castilla-La Mancha. Siglos XIX-XXI*, Madrid, Almud, pp. 197-238.
- BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar (2015): “Republicanos y demócratas contra la pena de muerte”, en J.S. Pérez Garzón (coord.), *Experiencias republicanas en la historia de España*, Madrid, Los Libros de la Catarata, pp. 183-211.
- BECCARIA, Cesare (2015) [1774]: *De los delitos y de las penas*, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid.

- BOLUFER, Mónica (coord.) (2015): “Dossier. Del uso de las pasiones: la civilización y sus sombras”, *Historia Social*, nº 81, pp. 67-168.
- BURILLO ALBACETE, Fernando José (2011): *La cuestión penitenciaria. Del Sexenio a la Restauración (1868-1913)*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.
- CABO, Miguel y VEIGA, Xosé R. (2011): “La politización del campesinado en la época de la Restauración. Una perspectiva europea”, en T. M^a Ortega López y F. Cobo Romero (eds.): *La España rural, siglos XIX y XX. Aspectos políticos, sociales y culturales*. Granada, Comares, pp. 21-58.
- CARNERO, Teresa (2013): “La (im)posible transición de primera oleada del liberalismo a la democracia en España (1860-1936)”, en A. Bosch, T. Carnero y S. Valero (eds.): *Entre la Reforma y la revolución. La construcción de la democracia desde la izquierda*, Granada, Comares, pp. 9-27.
- CERRO MALAGÓN, Rafael del (2007): *Noticias de Toledo entre 1801 y 1844: la memoria del curial Felipe Sierra*, Toledo, Ayuntamiento de Toledo.
- CRESPO JIMÉNEZ, Lucía (2008): *Trato, diversión y rezo. Sociabilidad y ocio en Toledo (1887-1914)*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.
- CRESPO JIMÉNEZ, Lucía (2015): “Los espacios de la sociabilidad republicana en la España provinciana de la Restauración: el caso de Toledo”, en J.S. Pérez Garzón (coord.), *Experiencias republicanas en la historia de España*, Madrid, Los Libros de la Catarata, pp. 212-248.
- CRUZ, Rafael (2008): *Repertorios. La política de enfrentamiento en el siglo XX*, Madrid, CIS.
- CRUZ, Rafael (2015): *Protestar en España, 1900-2013*, Madrid, Alianza.
- DE LA CASA NAVARRO, Francisco (1992): *La política y los políticos toledanos en el reinado de Alfonso XIII*, Toledo, Ayuntamiento de Toledo.
- DE LA CUEVA MERINO, Julio y MONTERO, Feliciano (eds.) (2007): *La secularización conflictiva. España (1898-1931)*, Madrid, Biblioteca Nueva.
- DUFF, Charles (2001): *A handbook on hanging*, New York, New York Review Books.
- ELIAS, Norbert (2000): *The civilizing process*, Oxford, Basil Blackwell [1^a ed., 1939].
- EVANS, Richard (1996): *Rituals of retribution: capital punishment in Germany, 1600-1987*, Oxford, Oxford University Press.
- FOUCAULT, Michel (1979): *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*, Madrid, Siglo XXI de España Editores.
- FRAILE, Pedro (1987): *Un espacio para castigar. La cárcel y la ciencia penitenciaria en España (siglos XVIII-XIX)*, Barcelona, El Serbal.
- FREVERT, Ute (2014): “The modern history of emotions: a research center in Berlin”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 36, pp. 31-55.
- GARCÍA VALDÉS, Carlos (1987): *Teoría de la pena*, Madrid, Tecnos.
- GARLAND, David (1999): *Castigo y sociedad moderna. Un estudio de teoría social*, México D.F., Siglo XXI.
- GARLAND, David (2005): *La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea*, Barcelona, Gedisa.
- GARLAND, David (2013): *Una institución particular. La pena de muerte en Estados Unidos en la era de la abolición*, Buenos Aires, Didot.
- GEERTZ, Clifford (1983): “Centers, kings and charisma: symbolic of power”, en *Local Knowledge: further essays in interpretive anthropology*, págs. 121-146.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (1998): *La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia en la España de la Restauración (1875-1917)*, Madrid, CSIC.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (1999): *El máuser y el sufragio. Orden público, subversión y violencia política en la crisis de la Restauración (1917-1931)*, Madrid, CSIC.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo y REY REGUILLO, Fernando del (1995): *La defensa armada contra la revolución*, Madrid, CSIC.

- HAY, Douglas (1977): "Property, authority and the criminal law", en D. Hay et al., (eds.), *Albion's fatal tree: Crime and society in the eighteenth century England*, Harmondsworth, Penguin.
- JOVER ZAMORA, José María (1997): "Aspectos de la civilización española en la crisis de fin de siglo", en J.P. Fusi y A. Niño (eds.), *Vísperas del 98. Orígenes y antecedentes de la crisis del 98*, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 15-46.
- LÓPEZ LÓPEZ, Gloria (1985): *Las elecciones municipales en Toledo (1905-1923). Análisis sociológico y evolución política*, Toledo.
- LUCEA AYAYA, Víctor (2002): "Reos, verdugos y muchedumbres: la percepción popular de la penalidad y la pena de muerte. Zaragoza, 1885-1915", *Revista de historia Jerónimo Zurita*, nº 76-77, pp. 129-158.
- LUCEA AYAYA, Víctor (2009): *El pueblo en movimiento. La protesta social en Aragón (1885-1917)*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.
- MARKOFF, John (1999): *Olas de democracia. Movimientos sociales y cambio político*, Madrid, Tecnos.
- MARQUINA Y KINDELÁN, Camilo (1900): *Breves consideraciones sobre el derecho de gracia*, Madrid.
- MATTHEWS, Roger (2003): *Pagando tiempo. Una introducción a la sociología del encarcelamiento*, Barcelona, Bellaterra.
- MELOSSI, D. y M. PAVARINI (1980): *Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX)*, Madrid, Siglo XXI.
- MINUESA PICAZO, Joaquín (s.a.): *Los juanillones*, Madrid, M. Minuesa.
- OLIVER OLMO, Pedro (2006): "Dos perspectivas de la historiografía del castigo en España", en *Contornos y pliegues del derecho. Homenaje al profesor Roberto Bergalli*, Barcelona, Anthropos.
- OLIVER OLMO, Pedro (2008): *La pena de muerte en España*, Madrid, Síntesis.
- OLIVER OLMO, Pedro (coord.) (2013): *El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX*, Barcelona Anthropos.
- OTTERBEIN, Keith (1986): *The ultimate coercive sanction: A cross-cultural study of capital punishment*, New Haven, CT: HRAF Press.
- PALACIOS CEREZALES, Diego (2011): *A culatazos. Protesta popular y orden público en el Portugal contemporáneo*, Genuve Ediciones.
- PARDO BAZÁN, Emilia (1891): *La piedra angular*, Madrid, s.n.
- PÉREZ GALDÓS, Benito (1891): *Ángel Guerra*, Madrid, La Guirnalda.
- PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio (1976): *Luis Morote: la problemática de un republicano (1862-1913)*, Madrid, Castalia.
- PÉREZ LEDESMA, Manuel (2000): "La conquista de la ciudadanía política: el continente europeo", en M. Pérez Ledesma (comp.): *Ciudadanía y democracia*, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, pp. 115-147.
- PÉREZ LEDESMA, Manuel (dir.) (2007): *De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- PLAMPER, Jan (2014): "Historia de las emociones: caminos y retos", *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 36, pp. 17-29,
- PULIDO FERNÁNDEZ, Ángel (1897): *La pena capital en España*, Madrid, s.n.
- PUYOL MONTERO, José María (2001): *La publicidad en la ejecución de la pena de muerte. Las ejecuciones públicas en España en el siglo XIX*, Madrid, Universidad Complutense.
- RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Enrique (2012): "La cuestión religiosa en la ciudad de Toledo (1898-1913). Clericales y anticlericales ante el espejo", *Vínculos de historia*, nº 1, pp. 231-246.
- RODRÍGUEZ DEVESA, José María (1967): "Contribución a la imagen numérica de la pena de muerte en España", en *Revista de Estudios Penitenciarios*, nº 176-177, págs. 359-369.

- RODRÍGUEZ-LÓPEZ, Carolina (coord.) (2014): “Dossier: historia de las emociones”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, nº 36, pp. 11-138.
- ROLDÁN BARBERO, Horacio (1988): *Historia de la prisión en España*, Barcelona, PPU.
- ROMERO SALVADÓ, Francisco J. (2008): *The foundations of civil war. Revolution, social conflict and reaction in liberal Spain, 1916-1923*, Londres, Routledge.
- ROMERO SALVADÓ, Francisco J. y SMITH, Angel (eds.) (2014): *La agonía del liberalismo español. De la revolución a la dictadura (1913-1923)*, Granada, Comares.
- RUÍZ FUNES, Mariano (1934): *Progresión histórica de la pena de muerte en España*, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado.
- SALILLAS, Rafael (1906): *La abolición de la pena de muerte*, Madrid.
- SERNA ALONSO, Justo (1988): *Presos y pobres en la España del siglo XIX. La determinación social de la marginación*, Barcelona, PPU.
- SERRANO TÁRRAGA, M^a. Dolores (1992): *La pena capital en el sistema español*, Madrid, UNED.
- SMITH, Philip (2008): *Punishment and culture*, Chicago, The University of Chicago Press.
- SPIERENBURG, Pieter (1984): *The spectacle of suffering. Executions and the evolution of repression: from a preindustrial metropolis to the European experience*, Cambridge, Cambridge University Press.
- STORM, Eric (2013): “Patrimonio local, turismo e identidad nacional en una ciudad de provincias: Toledo a principios del siglo XX”, *Hispania*, vol. LXXIII, nº 244, pp. 349-376.
- STRANGE, Carolyn (ed.) (1996): *Qualities of mercy. Justice, punishment and discretion*, Vancouver, UBC Press.
- SUÁREZ CORTINA, Manuel (1999): “Entre la barricada y el Parlamento: la cultura republicana en la Restauración”, en M. Suárez Cortina (ed.): *La cultura española en la Restauración*, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, pp. 499-523.
- TILLY, Charles (1992): *Coerción, capital y los estados europeos (990-1990)*, Madrid, Alianza Editorial.
- TILLY, Charles (2007): *Violencia colectiva*, Barcelona, Hacer Editorial.
- TILLY, Charles (2009): *Los movimientos sociales, 1768-2008: desde sus orígenes a Facebook*, Barcelona, Crítica.
- TOMÁS Y VALIENTE, Francisco (2002) [1979]: *Manual de historia del derecho español*, Madrid, Tecnos.
- TORRES CAMPOS, Manuel (1879): *La pena de muerte y su aplicación en España*, Madrid, F. Góngora y Compañía.
- TOWNSON, Nigel (ed.) (1994): *El republicanismo en España (1830-1977)*, Madrid, Alianza Universidad.
- TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro (1991): *La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en España (siglos XVIII-XX)*, Madrid, Alianza Universidad.
- URDA LOZANO, Jesús Carlos (2011): *El bandolerismo en los Montes de Toledo durante el siglo XIX*, Ciudad Real, Trabajo de Fin de Máster, inédito.